



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-006-2020-00316 (O2-22-309)
Demandante: SANDRA LILIANA VALENCIA QUINTERO
Accionada: SAFETY FIRST COLOMBIA S.A.S.
Procedencia: JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: AUTO INTERLOCUTORIO No.070 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2022
Asunto: PRACTICA DE PRUEBAS - TESTIMONIOS

En Medellín, a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en su carácter de magistrado sustanciador, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto de sentencia, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión del 22 de agosto de 2022, dentro del proceso ordinario promovido por la señora SANDRA LILIANA VALENCIA QUINTERO en contra del SAFETY FIRST COLOMBIA S.A.S., radicado bajo el n.º 05001-31-05-006-2020-00316 (O2-22-309).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente decisión,

1. ANTECEDENTES.

Por intermedio de apoderada judicial, SANDRA LILIANA VALENCIA QUINTERO, pretende que se declare que sostuvo un contrato de trabajo a término indefinido con la demandada desde el 19 de octubre de 2017 al 21 de febrero de 2020, el que fue terminado ilegalmente por la demandada por ser beneficiaria del fuero de salud, y en consecuencia, que sea condenada a reintegrarla al cargo, con el pago de los salarios dejados de percibir, o en subsidio, el pago de la indemnización por despido injusto; adunado al pago de la indemnización de 180 días de salario, la indexación de las condenas, y las costas procesales.

Fundamenta sus pretensiones en que laboró para la empresa demandada desde el 19 de octubre de 2017 al 21 de febrero de 2020 desempeñando el cargo de fisioterapeuta especializada en salud ocupacional, mediante contrato a término indefinido, con un último salario mensual de \$2.782.500; que el 31 de enero de 2020 fue diagnosticada con "*Lumbago no especificado*" y fue incapacitada hasta el 6 de febrero de 2020; que el 7 de febrero de 2020 fue diagnosticada con "*Trastorno Mixto Ansioso Depresivo*", a raíz del estrés laboral generado por sobrecarga de tareas y maltrato psicológico, y fue incapacitada hasta el 14 de febrero de 2020; que por su estado de salud asistió a citas médicas el 17, 18 y 19 de febrero de 2020, aunque no fue incapacitada; que el 20 de febrero de 2020 solicitó al empleador una licencia laboral no remunerada, la cual fue denegada y, en su lugar, la citaron para absolver descargos el 21 de febrero de 2020 por no haber asistido a laborar el 17, 18 y 19 de febrero de 2020, sugiriéndole que renunciara para no ser despedida; que el 20 de febrero de 2020 fue incapacitada nuevamente hasta el 26 de febrero de 2020; que a pesar de no poder asistir por estar incapacitada, se efectuó la diligencia de descargos el 21 de febrero de 2020; que el 24 de febrero de 2020, fue notificada de que fue despedida a partir del 21 de febrero de 2020, por faltar al trabajo injustificadamente; y que el reglamento interno de trabajo establece que se debe verificar que el trabajador no esté incapacitado antes de despedirlo, lo que no se cumplió en su caso; que el 24 de marzo de 2020 le diagnosticaron "*Trastorno de Adaptación y Trastorno de Pánico con Ansiedad Generalizada*"; le ordenaron tratamiento durante al menos 2 años con psiquiatra o psicológico y le recetaron medicamentos; y que el 13 de julio de 2020 le recomendaron iniciar un proceso de calificación.

Seguidamente, solicitó que se decretaran en el proceso la práctica de las siguientes pruebas, entre otras: "*Declaración de Parte*" y la "*revisión del correo electrónico de Sandra Liliana Valencia*", y frente a este último expuso que "*En el caso de que el señor(a) Juez considere este medio de prueba como una inspección judicial, ruego darle el trámite pertinente de este medio de prueba*".

1.1 TRAMITE EN INSTANCIA.

La demanda fue admitida mediante auto del 3 de junio de 2021 (doc. 07), la cual fue respondida por SAFETY FIRST COLOMBIA S.A.S. mediante poderhabiente judicial el 24 de junio de 2021 (doc. 08), quien se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que a su parecer no hubo despido ilegal, sino que la terminación se efectuó de manera legal, por justa causa y no en razón del estado de salud que refiere la parte demandante, y en tal propósito, propuso las excepciones de mérito que rotuló: inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, prescripción, pago por cubrimiento, compensación, y buena fe.

Seguidamente, en la etapa de decreto de pruebas de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. (min. 12:40), celebrada el 22 de agosto de 2022, la juzgadora de instancia resolvió no decretar la declaración de parte, arguyendo al efecto que la normativa procesal no faculta a la propia parte a emitir declaración a instancia de su apoderado judicial para constituir prueba en el proceso (min. 13:00), al tiempo de no decretar la impetrada inspección judicial al correo electrónico de la demandante, sin ni siquiera exponer las consideraciones de tal negativa (min. 14:30), para finalmente decretar las demás pruebas solicitadas por la parte actora.

1.2 TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN.

Inconforme con la decisión emitida, el apoderado judicial de la parte actora interpone de manera oportuna el recurso de reposición y en subsidio apelación frente al auto que negó la práctica de la prueba "*Declaración de parte*", arguyendo al efecto que el principio de libertad probatoria permite al juez decretar cualquier medio probatorio útil para la formación de su convencimiento, siendo que la declaración de parte está contemplada en el CGP, y ello se compadece con la intención de la parte de ser escuchada en juicio, que no se suple con el interrogatorio que puedan formularle la juez y el apoderado judicial de la contraparte, en tanto en desarrollo de éste se estaría limitando las preguntas que se formulen y por ello no podría expresar libremente su versión de los hechos. En igual sentido, refutó el apoderado judicial la negativa de decretar la inspección judicial al correo electrónico de la demandante, esgrimiendo para ello que el litigio versa en establecer si la demandante es beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada por salud y sí hubo una justa causa en la terminación del contrato de trabajo, por lo que tal prueba es determinante en el *sub lite* para establecer los hechos 13 y 16 de la demanda, los cuales no fueron aceptados por la accionada al contestar la misma.

De manera subsecuente, la *a quo* estimó (min. 30:00) que la declaración de parte está ligada a la prueba de confesión y visto que la prueba deprecada como "*Declaración de parte*" no tiene propósitos de confesión, no resulta procedente decretar la misma, pues ello equivaldría a autorizar a la parte a construir su propia prueba, máxime que la parte tuvo la oportunidad para exponer su versión de los hechos en la demanda, y finalmente indicó que no repondría su decisión, pero que en caso de que la contraparte renunciara al interrogatorio de parte que deberá absolver la demandante, la juez oficiosamente efectuaría dicho interrogatorio. Frente a la inspección judicial al correo electrónico de la demandante (min. 34:00), la cognoscente de instancia repuso la decisión parcialmente, indicando que se decretaba la práctica de dicha inspección judicial por estimarla pertinente de cara a establecer los hechos de la litis, pero que la misma no se sería llevada a cabo por la juez, sino que se haría a través de perito

experto en temas de comunicaciones electrónicas, dictamen que sería a costa de la parte demandante.

A posteriori, (min. 36:00), el apoderado judicial de la parte actora se ratificó en el recurso de apelación formulado, al estimar que la *a quo* no accedió a todo lo pedido en los recursos de reposición y en subsidio apelación, frente a lo cual, la juzgadora concedió el recurso de apelación (min. 36:45) en el efecto suspensivo (min. 39:00), para que el mismo sea resuelto para ante la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surcado el trámite en esta instancia, y al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la relación procesal, en consonancia con lo previsto en los artículos 65 del C.P.T. y de la S.S. y 320 y ss. del C.G.P., preceptiva aplicable por vía de interpretación analógica bajo el auspicio del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., para lo cual precisa la Sala hacer las siguientes:

2.1. CONSIDERACIONES

Frente al asunto aquí planteado, cumple advertir que en términos del artículo 65 del Estatuto Adjetivo Laboral en cuanto a la procedencia del recurso de apelación contra los autos proferidos en primera instancia, en su numeral 4º alude al auto que *"niegue el decreto o la práctica de una prueba"*.

2.1.1. Declaración de parte

En orden a resolver el quid de la litis, importa memorar que el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970, art. 194) establecía cinco medios de prueba, entre estos, la declaración de parte, en cambio, el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, art. 165) consagra siete medios de prueba, de los cuales separa la confesión de la declaración de parte, y los regula de manera autónoma, de donde se puede concluir, *prima facie*, desde una perspectiva formal, que uno y otro medio probatorio tienen naturaleza jurídica diferente.

El Código General del Proceso en el artículo 191, en similar forma como lo disponía el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, prevé los mismos requisitos de la confesión, pero adiciona en la parte final que: *"La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas"*.

Ahora, una de las razones por las cuales se consolidó la declaración de parte como medio de prueba en el C.G.P., corresponde a la necesidad de que su regulación esté acompañada con las nuevas tendencias que se han posicionado en el derecho procesal, de las que la oralidad constituye una de esas razones, aunado a las posturas doctrinales que se han abierto camino, no solo en lo tocante a la confesión, sino también a los apartados del dicho de la parte procesal que no constituye confesión, ya que su valoración queda a la ponderación juiciosa del juzgador, quien es el llamado para que, atendiendo a las reglas de la libre persuasión y crítica probatoria le reconozca el valor de convicción que le corresponda como cualquier otro medio de prueba dentro del proceso.

Así pues, colacionando los predicamentos del tratadista de derecho procesal Canosa Suárez (2013): *"El nuevo sistema oral supone intensificar en alto grado el contacto entre los sujetos del proceso, también en los aspectos probatorios, desarrollando nuevos mecanismos de averiguación de la verdad. En el sistema esencialmente escrito del CPC el saber de las partes era un instituto aprovechado limitadamente mediante el interrogatorio de la contraparte para provocar la confesión. Ahora ese dicho o saber de las partes incrementa en el C.G.P. su utilidad para la formación del convencimiento del juez, porque podrá usarse como fuente de prueba aunque no sea perjudicial para el declarante, esto es, así beneficie a la propia parte. (p. 140).*

Igualmente, establece Canosa Suárez (2013, p. 1) que la inclusión de la declaración de parte y la confesión como dos medios de prueba autónomos en el Código General del Proceso, fue un aspecto de intensas polémicas, dado que históricamente se ha rechazado la confiabilidad frente a los hechos que pueden beneficiar a la parte procesal deponente; no obstante, dado que el C.G.P. adopta la oralidad como principio rector, ello permite al juez el contacto con las partes del proceso, lo cual maximiza la inmediación y la libre valoración probatoria.

Del mismo modo, Sanabria Villamizar, R.J (2015, p.2) al hacer el parangón del análisis de la prueba testimonial y pericial en el Código General del Proceso y en el procedimiento penal, a grandes líneas precisa que, la elaboración del proyecto del C.G.P. y su posterior promulgación se debe *"a uno de los fenómenos de gestación legislativa más democrática de la historia jurídico colombiana"*, y que por ello, en materia probatoria puede apreciarse *"la adopción tácita de garantías como la confrontación de la prueba"*.

Las anteriores disquisiciones caen dentro de la órbita del C.G.P., pues con la declaración de parte como medio de prueba, las partes procesales tienen la facultad de interrogar, contrainterrogar, comparecer al proceso y hacer comparecer a la contraparte, e incluso permite la posibilidad de estar frente a frente con la contraparte, características esenciales del derecho de confrontación, el que en efecto se encuentra de manera tácita regulado en

el C.G.P., *verbi gracia*, en las previsiones legales contenidas en el inciso final del artículo 198 del C.G.P., en las que se establece el careo entre las partes al momento de practicar el interrogatorio.

En esa línea, el Consejo Superior de la Judicatura (2013) con fundamento en el nuevo sistema oral del C.G.P., previó que si bien se afirmaba que nadie podía crear en su favor una propia prueba, restándole valor probatorio a la simple declaración de parte, ahora, en virtud del deber de veracidad propio de la oralidad, puede utilizarse el dicho de la propia parte en los procesos judiciales, correspondiéndole al juzgador su valoración de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en conjunto con los demás medios de prueba.

En esa misma dirección, vale resaltar las características esenciales que plantea el tratadista Álvarez Gómez Marco Antonio (2017), en su obra *Ensayos sobre el Código General del Proceso* con la inclusión de la declaración de parte como medio probatorio independiente, entre las que se memora, el derecho a ser oído, es decir, la garantía constitucional de las partes procesales de relatar los hechos materia de controversia ante el juez y, que sea este último, quien valore tal declaración bajo los postulados de la sana crítica.

La segunda característica relacionada con que el derecho a ser oído difiere del proceso por audiencias y del proceso escrito, pues, en el proceso por audiencias se permite desarrollar el principio de inmediación, en la medida en que el juzgador recibe en la declaración el relato de los hechos por la misma parte procesal.

La tercera característica, corresponde a la función del juez, en tanto que, como cualquier medio de prueba, la declaración de parte debe ser valorada con sujeción a las reglas de la sana crítica; y por último, una cuarta característica, atinente a que en la actualidad no son aceptables las inhabilidades por credibilidad, en tanto que, nos encontramos en procesos por audiencias donde rige el principio de oralidad, cuya finalidad es que el juez se "*entere de los hechos por la boca misma de las partes*" (Álvarez, M, 2017, p.14).

En lo relativo a la declaración de parte, el inciso final del artículo 191 del C.G.P. establece que se valorará de acuerdo con las reglas de apreciación de las pruebas, y en tal sentido, como cualquier otro medio de prueba se someterá a las reglas de la sana crítica, siendo el juez el que determine la fuerza o el valor suasorio de tal medio probatorio, en tanto que suministre valiosa información, elementos de convicción o de juicio, no sea contradictoria y tenga un asidero objetivo.

Álvarez Gómez Marco Antonio (2017, p. 16), en su obra *Ensayos sobre el Código General del Proceso*, plantea dos aspectos esenciales en lo que respecta a la valoración de la

declaración de parte, el primero, que *"nada obsta para que se emita una sentencia respaldada probatoriamente en la declaración de parte que triunfa"*; y, segundo, que al ser la declaración de parte un testimonio de los hechos narrados por la misma parte, el juez debe verificar si fue responsivo, exacto y completo.

Finalmente, estima pertinente la Sala asuntar, que en reciente sentencia STC9197-2022, la Corte Suprema de Justicia aquilató que:

"... Es tan relevante, pertinente y necesaria la declaración de la parte en el proceso jurisdiccional, que el Código General del Proceso, expedido en coherencia con los postulados y principios que sirven de faro al Estado Constitucional y Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista implementado en la Carta Política de 1991, la positivizó, y lo hizo cuando autorizó a cada litigante para brindar al proceso su versión de los hechos y previno al juez para que la valore en comunión con las demás pruebas. Nótese cómo en el artículo 165, referido a los medios de prueba, distinguió entre declaración de parte y confesión, lo que reafirmó en el artículo 198 cuando estableció que «el juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso» y reiteró al final de ese precepto al consagrar que «la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo a las reglas generales de apreciación de las pruebas». Con ello (...) le dio carta de naturaleza propia a la declaración de parte y primacía al derecho superlativo que tiene toda persona a ser oída por el funcionario que la va a juzgar, sin necesidad de que el juez o su contraparte la llamen a interrogatorio, sino por su propia iniciativa, lo que concuerda con el artículo 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso dentro del cual se halla ínsito el derecho de defensa y contradicción, así como la garantía que tiene todo justiciable para ser escuchado y que está prevista en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a cuyo tenor «toda persona tiene derecho a ser oída por los jueces o tribunales (...) para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil» y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 10 establece que «toda persona tiene derecho (...) a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial». Por consiguiente, (...) el fallador debió apreciar libremente la exposición factual de los demandados y valorarla acorde con las pautas trazadas en el estatuto procesal, a fin de cotejar su contenido con los demás elementos de prueba obrantes en el infolio y extraer, de ese escrutinio, el mayor convencimiento posible y útil para zanjar la pendencia. Como no lo hizo, incurrió en un defecto fáctico que habrá que remediar."

De acuerdo con lo anterior, como quiera que la parte actora solicitó específicamente la prueba de "Declaración de parte" con el libelo genitor, cumple precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral por así preverlo el artículo 145 del Estatuto Instrumental Laboral, resulta procedente el decreto de tal medio probatorio, y en consecuencia, se revocará la decisión de instancia que negó el decreto de tal probatura, para en su lugar, acceder en favor de la demandante al decreto de la declaración de parte solicitada.

Es de anotar, que el presente análisis se limitó a la posibilidad de que la práctica de la declaración de parte esté admitida legalmente (conducencia), siendo que esta fue el principal argumento de la *a quo* para denegar su práctica, argumentando su inconducencia; de suerte que, no se ha dicho nada frente a la finalidad de lograr el efecto que se espera con dicha prueba (pertinencia), ni a su aporte al proceso (utilidad), por lo que estos últimos aspectos aún pueden y deberán ser definidos por el juez de primera instancia de cara a la práctica de la prueba impetrada.

2.1.2. Inspección judicial y dictamen pericial

En derredor de este asunto, *ab initio*, se relievra que el artículo 55 del CPT y la SS, prescriptor de la procedencia de la diligencia de inspección judicial, enseña que: *“Cuando se presenten graves y fundados motivos o para aclarar hechos dudosos, el Juez podrá decretar inspección judicial, siempre que tal diligencia pueda cumplirse sin grave daño para las partes o los terceros, y sin obligarlos a violar secretos profesionales, comerciales o artísticos.”*

Por lo visto se tiene que, la demandante en la oportunidad procesal para ello solicitó el decreto y la práctica de un medio probatorio legalmente establecido para este tipo de procesos, como lo es la inspección judicial, a tiempo que la cognoscente de instancia, en etapa de decreto de pruebas, al pronunciarse sobre la solicitud antedicha, dispuso acceder al pedimento en cuestión, pero a través de perito.

A este respecto, para la Sala refulge palmar la conducencia de la prueba de inspección judicial, toda vez que es un medio probatorio autónomo reconocido por el artículo 55 del CPT y la SS trasunto, siendo que en el *sub lite* existen motivos fundados para su decreto, al ser necesaria para aclarar hechos dudosos planteados por las partes, a la vez que la misma se puede cumplir sin grave daño para las partes o terceros y sin que éstos tengan que violar secretos profesionales, comerciales o artísticos al permitir su práctica.

Empero, ciertamente la legislación procesal laboral no regula *in extenso* la inspección judicial como medio probatorio autónomo, de suerte que para resolver la controversia resulta necesario acudir a los artículos 235 y siguientes del C.G.P., preceptiva aplicable por vía de interpretación analógica bajo la égida del artículo 145 del C.P.T. y la S.S.

En este propósito, se advierte que el artículo 236 del C.G.P., establece que *“(…) solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videgrabación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba. (…) El juez podrá negarse a decretar la inspección si*

considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, (...)".

Ello así, es claro para la Sala que a la luz de la normativa en cita, la juez no solamente estaba facultada, sino que debía disponer que los hechos materia de revisión con inspección judicial incoada, fueran verificados mediante dictamen pericial, habida cuenta que tal experticia es posible de acuerdo con la finalidad pretendida, y que dicho dictamen sería suficiente a los propósitos buscados, y en consideración a que tanto el estatuto adjetivo laboral como el estatuto adjetivo general disponen que la inspección judicial es una prueba extraordinaria que procede únicamente cuando no es posible verificar o aclarar los hechos materia de la litis por otros medios probatorios, debiéndose confirmar la decisión de primera instancia en tal sentido.

3. COSTAS

Sin costas en esta instancia, por haberse resuelto parcialmente favorable el recurso de apelación propuesto por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

4. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión del 22 de agosto de 2022, mediante la cual el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN negó el decreto de la declaración de parte deprecada por SANDRA LILIANA VALENCIA QUINTERO, para en su lugar, **DECRETAR** la declaración de parte incoada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión del 22 de agosto de 2022, mediante la cual el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN dispuso que la verificación de correo electrónico solicitada mediante prueba de inspección judicial por SANDRA LILIANA VALENCIA QUINTERO, se practique a través de perito experto, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.


TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, en la medida en que no se causaron.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara surtida la presente audiencia y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORIUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS No.220**, fijados en la secretaría del Tribunal, hoy **06 de diciembre de 2022** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en ["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario